

CEPAL

Ocho obstáculos impiden desarrollo sostenible de América Latina

IPS, 3 de octubre de 2019.

MÉXICO, 3 oct 2019 (IPS) - Hay ocho frenos que impiden el desarrollo social de la región y que van desde la enquistada pobreza a la desigualdad crónica, pasando por la falta de inversión y los impactos del cambio climático, identificó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Para superarlos, la organización propone crear políticas centradas en los derechos y la igualdad, siguiendo los pasos marcados por la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

Los países de América Latina y el Caribe están ante el desafío de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo basado en la igualdad, la inclusión social y laboral, la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico.

Hacer frente a este desafío implica impulsar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: **la social, la ambiental y la económica**.

La [CEPAL](#) señala que lo social no se juega en lo social exclusivamente, sino también en la economía, la política y el medioambiente.

Durante la [Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe](#), que concluye este jueves en la Ciudad de México, el organismo de la ONU presentó [un estudio](#), de 70 páginas, en el que identifica **ocho obstáculos** que impiden el desarrollo social en la región:

La persistencia de la pobreza

En 2017, el número de personas en situación de pobreza en América Latina llegó a los 184 millones, equivalente al **30,2% de la población**, de los cuales 62 millones, un 10,2%, vivían en la pobreza extrema.

Además, en 2016, el 41,7% de las personas ocupadas en América Latina recibían **ingresos laborales inferiores a los salarios mínimos** nacionales. Este porcentaje era especialmente elevado entre las mujeres jóvenes, un 60,3%.

Aunque, entre 2002 y 2014, la pobreza bajó del 44,5% al 27,8% y la pobreza extrema, del 11,2% al 7,8%; entre 2015 y 2016 se registraron aumentos sucesivos de ambos indicadores, lo que representó un retroceso significativo. Las cifras de 2017 revelaron [un incremento adicional de la pobreza extrema](#) y un estancamiento de la tasa de pobreza registrada en 2016.

A pesar de las diferencias que se observan de país en país, la pobreza presenta **rasgos comunes** en toda la región:

- mayor incidencia entre las mujeres
- mayor incidencia entre los menores

- mayor incidencia entre las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y las personas con discapacidad

Las desigualdades estructurales y la cultura del privilegio

“Los altos niveles de desigualdad existentes en la región conspiran contra el desarrollo y son una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad democrática”, asegura la CEPAL.

Y añade que “la desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica”.

Entre 2002 y 2017, la desigualdad en la distribución del ingreso, expresada mediante el índice de Gini del Banco Mundial -que mide la desigualdad de ingresos de los ciudadanos en un país-, se redujo de 0,534 a 0,466, lo que es un resultado significativo.

Sin embargo, el ritmo de la disminución entre 2014 y 2017 se ha ralentizado y, a pesar de los avances, América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo.

Más allá del apartado económico, las desigualdades abarcan la desigualdad en el ejercicio de los derechos, las capacidades y los niveles de autonomía. También incluye la desigualdad de género, la étnica y raciales, y la territorial, entre otras.

Esas desigualdades se ven acentuadas y bloqueadas por la llamada cultura del privilegio que naturaliza las jerarquías sociales y las profundas asimetrías de acceso a los frutos del progreso, la deliberación política y los activos productivos.

Las brechas en educación, salud y de acceso a servicios básicos

La CEPAL observa que, en las últimas décadas, América Latina ha experimentado importantes avances en ámbitos como la salud y la educación, así como en el acceso a la vivienda, los servicios básicos tales como el agua potable, la electricidad y el saneamiento, e internet.

Sin embargo, persisten las brechas. A nivel regional, 6 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 24 años concluyeron la educación secundaria, lo que muestra una mejora desde comienzos de la década de 2000, pero que aún debe ampliarse para universalizar la conclusión de este nivel educativo. En ese sentido, es necesario fortalecer las estrategias para prevenir la temprana deserción del sistema escolar.

Además, la educación superior sigue reservada para una proporción reducida de la población: en promedio, en 2016, mientras que más de un 40% de los jóvenes de entre 25 y 29 años del quintil de mayores ingresos concluyeron al menos cuatro años de educación terciaria, solo el 3,6% de quienes pertenecen al quintil de menores ingresos alcanzaron ese nivel.

Lo mismo ocurre con la salud, donde los indicadores generales han mejorado, pero donde la región aún enfrenta grandes desafíos, especialmente con respecto a ciertas

poblaciones.

Como ejemplo, la CEPAL señala que, en algunos países, la mortalidad infantil entre los afrodescendientes llegaba a ser hasta 1,6 veces mayor que la registrada en el caso de los no afrodescendientes, mientras que la tasa de mortalidad entre los niños indígenas casi duplica las de los no indígenas.

La falta de trabajo y la incertidumbre del mercado laboral

“El trabajo es **la llave maestra para la igualdad**, el desarrollo personal y el crecimiento económico”, asegura el documento.

Sin embargo, la estructura y las dinámicas de los mercados de trabajo en la región siguen caracterizándose por su [incapacidad para generar empleos productivos y un trabajo decente](#), rasgo que nuevamente hunde sus raíces en las profundas desigualdades de género, raza y edad.

En América Latina, los ingresos de los ocupados en sectores de baja productividad no alcanzan a la mitad de los que perciben los ocupados en los sectores de productividad media y alta. Además, la tasa de pobreza entre las personas ocupadas en empleos de baja productividad (30,4%) **triplica la de los ocupados en empleos de alta productividad**.

El desempleo juvenil es motivo de especial preocupación, mientras el trabajo infantil “representa una de las antítesis más claras de la noción de trabajo decente y un fuerte obstáculo para el desarrollo social inclusivo”.

Al reto de proporcionar mejores empleos, se añade ahora la incertidumbre que crea el impacto de los cambios tecnológicos. No obstante, puede ser un momento de oportunidad a condición de que se combine con **políticas dirigidas a la promoción del trabajo decente**.

Acceso parcial y desigual a la protección social

A pesar de que la protección social es un derecho y es clave para eliminar la pobreza, que evita la marginación; y a pesar de los grandes avances registrados, la capacidad efectiva de los Estados de América Latina para proveer garantías universales de protección social a lo largo del ciclo de vida **sigue siendo limitada**.

La CEPAL destaca que la protección social representa una de las **funciones más relevantes del gasto público**, a la que en 2016 se destinó un monto equivalente en promedio al 4,1% del PIB, según datos de un conjunto de 17 países de América Latina y el Caribe.

También se ha hecho un gran esfuerzo en la afiliación o cotización a sistemas de salud de los ocupados de más de 15 años, ya que entre 2002 y 2016, **augmentó del 36,8% al 57,3% en 14 países**.

No obstante, los avances, persisten las brechas de cobertura, sobre todo entre los trabajadores pertenecientes a los estratos de ingreso más bajos, aquellos que viven en zonas rurales y las mujeres.

Por ejemplo, en 2016, mientras que el 65,1% de los ocupados de 15 años y más del quintil de mayores ingresos estaban afiliados o cotizaban a un sistema de pensiones, solo el 19,4% de los ocupados del primer quintil de ingresos estaba en esa situación, proporción que se reducía al 16,3% en el caso de las mujeres de este grupo.

La institucionalización de política social aún en construcción

Desde el punto de vista de la Agenda 2030, la institucionalidad es el marco en el que deberían expresarse los compromisos para su cumplimiento, a través de la implementación de **políticas a largo plazo** y con amplia legitimidad social.

Esto, sin embargo, está lejos de ser una realidad, y más bien constituye un proceso en curso en la mayoría de los países de la región.

“En muchos casos, las políticas y programas sociales en general, y la protección social en particular, **descansan sobre bases institucionales frágiles** y están sujetas a cambios abruptos de orientación, a una limitada capacidad de coordinación entre los actores gubernamentales relevantes y a poca claridad en sus objetivos y alcance”, explica la CEPAL.

Una inversión social insuficiente

Financiar las políticas sociales es un factor clave para el logro del desarrollo social inclusivo, así como **transformar la idea de gasto corriente en la de inversión social**.

Un elemento clave para destinar recursos a políticas sociales es la carga tributaria. En 2017, los ingresos tributarios totales en América Latina y el Caribe ascendieron al 22,8% del PIB, en comparación con un promedio del 34,2% del PIB en el caso de los países de la OCDE.

Además de **augmentar la tributación**, parte del problema del financiamiento de las políticas sociales podría resolverse mejorando la efectividad de la recaudación.

Este es un gran desafío para la región, considerando que [el nivel de evasión fiscal en América Latina](#) ascendió a un total del 6,3% del PIB, el equivalente a un total de 335.000 millones de dólares en 2017.

“Si los países pudieran reducir una parte de este incumplimiento, esos ingresos adicionales podrían dar un ímpetu importante para lograr las metas sociales y económicas incorporadas en los [Objetivos de Desarrollo Sostenible](#)”, resalta la CEPAL.

Obstáculos emergentes

A los obstáculos anteriores, la CEPAL añade **cinco trabas emergentes** para el desarrollo social:

La violencia: América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, algo inesperado dado su nivel de desarrollo económico, político y social. Por ejemplo, la tasa de homicidios de la región es cinco veces mayor que el promedio mundial. La violencia no solo se refiere a homicidios, sino también

a otras expresiones de violencia, como asaltos e incidentes de violencia sexual

Los desastres naturales y el cambio climático: La mayor frecuencia con que ocurren desastres naturales y [fenómenos extremos](#) relacionados con el [calentamiento global](#) hace que sea indispensable diseñar estrategias para reducir la exposición de la población.

La transición demográfica: Si bien existen grandes diferencias entre los países de la región respecto del descenso de la fecundidad, las tasas de fecundidad pasaron de un promedio de 5,5 hijos por mujer entre 1965 y 1970 a 2,05 hijos entre 2015 y 2020. Al proyectar estas tendencias, se espera que en el futuro las tasas de dependencia aumenten debido al incremento en la proporción de personas mayores.

Las migraciones: Las nuevas presiones en el entorno mundial, comenzando por la actual política migratoria estadounidense, han imprimido mayor urgencia a esta temática. A su vez, la región no está exenta de flujos migratorios forzados por desastres naturales y climáticos poco predecibles, así como por crisis económicas e inestabilidad política.

Los cambios tecnológicos: Las transformaciones tecnológicas están teniendo notables efectos en la educación y la formación. De no universalizar el acceso para aprovechar las nuevas herramientas, continuará reforzándose la desigualdad.

Al concluir la reunión de la Conferencia Regional en México, aprobaron una agenda regional encaminada a avanzar hacia la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, señaló que “América Latina y el Caribe tiene que demostrarle al mundo que tiene un compromiso profundo con el desarrollo social, con el combate a la desigualdad, a la pobreza y a la pobreza extrema, a pesar de los problemas, obstáculos y dilemas económicos, políticos y sociales por los que atravesamos”.

Bárcena enfatizó que “no podemos bajar la guardia porque la economía nos está imponiendo restricciones muy severas. Los programas sociales deben seguir siendo prioridad para los países de nuestra región”.

Este [artículo](#) fue publicado originalmente por la [Organización de Naciones Unidas](#) (ONU).